

ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID

ACUERDO

Preliminar nº297/20. Examinados los antecedentes referidos al oficio remitido por el CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA, en relación con el letrado DON _____, se considera que no cabe incoar procedimiento alguno de carácter disciplinario, pues:

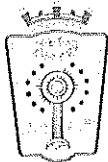
Primero. Se pone de manifiesto en el oficio recibido que el letrado Sr. García figura como procurador ejerciente en el Colegio de Procuradores de Guadalajara, lo que podría constituir vulneración de la incompatibilidad de las profesiones de abogado y procurador.

Segundo. El artículo 22.1.b) del Estatuto General de la Abogacía (Real Decreto 658/2001, de 22 de junio) dispone que *“asimismo, el ejercicio de la abogacía será absolutamente incompatible con: b) el ejercicio de la profesión de procurador; graduado social, agente de negocios, gestor administrativo y cualquiera otra cuya propia normativa reguladora así lo especifique”*.

La Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, señala en su artículo 1º que su objeto es el establecimiento de *“las disposiciones generales necesarias para facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de los servicios, manteniendo, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios”*.

La transposición de la citada Directiva al ordenamiento jurídico interno se ha llevado a cabo por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como “Ley Paraguas”), cuyo artículo 25.1 señala que *“no se podrá obligar a los prestadores de servicios el ejercicio de una única actividad de forma exclusiva, bien sea a través de la imposición de requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una actividad específica, bien sea mediante la imposición de requisitos que restrinjan el ejercicio conjunto o en asociación de distintas actividades”*, si bien el apartado 2 del mismo artículo contempla la posibilidad de que por Ley puedan imponerse dichos requisitos a determinadas profesiones.

Por su parte, el apartado segundo de la disposición derogatoria de la citada Ley “Paraguas” determina que las disposiciones vigentes a la entrada en vigor de la misma que resulten incompatibles con su artículo 25 mantendrán su vigencia hasta que sean objeto de reforma expresa y, en todo caso, quedarán derogadas el 27 de diciembre de 2009, fecha en que entró en vigor la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida a su vez como Ley “Ómnibus”) y que añade el apartado 5 al artículo 2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales y



ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID

con el siguiente tenor: *“en todo caso, los requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una profesión o que limiten el ejercicio conjunto de dos o más profesiones, serán sólo los que se establezcan por ley”*.

Se llega así a la conclusión de que debe ser una norma con rango de Ley – del que carece el Estatuto General de la Abogacía, que tiene rango de Real Decreto – la que determine la incompatibilidad del ejercicio de dos o más profesiones, por lo que el artículo 22.2.b) del Estatuto General de la Abogacía debe entenderse derogado en aplicación de las disposiciones derogatorias de la “Ley Paraguas” y “Ley Ómnibus”.

Tercero. No obstante, el artículo 23.3 de la LEC, con rango normativo suficiente a los efectos antes reseñados, dispone en su segundo inciso - añadido por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial- que *“es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales”*.

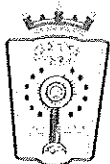
Ahora bien, la redacción del régimen de incompatibilidad que el citado precepto prevé plantea las siguientes dudas o cuestiones:

- a) Si es incompatible el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador simultáneamente en un mismo procedimiento.
- b) Si existe una incompatibilidad absoluta para ejercer de abogado y de procurador.

Para tratar de resolver la cuestión planteada debemos acudir a los criterios de recta hermenéutica recogidos con carácter general en el artículo 3.1 del Código Civil, que determina que *“la normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”*.

Pues bien, la aplicación del criterio interpretativo gramatical de la norma exige delimitar los términos *“ejercicio simultáneo”* que figuran en el último inciso del artículo 23.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el bien entendido que el adjetivo *“simultáneo”*, según el Diccionario de la Real Academia, se predica de algo que *“se hace u ocurre al mismo tiempo que otra”*, lo que permite sostener la primera de las interpretaciones posibles, esto es, la incompatibilidad del ejercicio de las profesiones de abogado y procurador simultáneamente en un mismo procedimiento, máxime teniendo en cuenta la diferente redacción del artículo en cuestión -mucho más matizada- con la del artículo 22.2.b) del Estatuto General de la Abogacía antes transcrito.

A idéntica conclusión se llega en aplicación del criterio interpretativo histórico (antecedente normativo) pues el inciso final del artículo 23.3 Ley de Enjuiciamiento



ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID

Civil no se encontraba en la redacción inicial del proyecto que desembocó en la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, y que lo introduce.

En efecto, en la tramitación en el Congreso de los Diputados del proyecto de Ley se plantean unas enmiendas de adición por los Grupos Parlamentarios Popular, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y diputados del Grupo Mixto, en las que se propone añadir un nuevo apartado al artículo decimotercero del Proyecto por el que se modifica el artículo 23 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, añadiendo un apartado 4 con el siguiente texto:

"4. El ejercicio de la Procura es incompatible con el de la Abogacía."

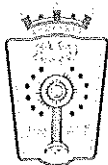
Y se justifica tal pretensión en que la incompatibilidad entre el ejercicio de la Procura y la Abogacía viene determinada por la diferente naturaleza y posición jurídica de ambos profesionales en el proceso, pues el procurador asume la representación técnica de las partes pero, además, es un cooperador de la Administración de Justicia, lo que añade una dimensión pública a su actividad que excede al único interés de sus clientes.

Sin embargo esta incompatibilidad absoluta no es llevada al texto definitivo de la Ley. La Ponencia del Congreso propone por unanimidad la introducción de una transacción en relación con las enmiendas núms. 753, 130 y 353 y con el siguiente texto, finalmente aprobado:

"... Es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales."

A la vez que se tramitaba esa Ley 13/2009, se tramitaba también la Ley 17/2009 (Ley "Paraguas"), por la que se incorpora parcialmente la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior ("Directiva de Servicios") y cuyo artículo 25 es del siguiente tenor:

"Actividades multidisciplinares: 1. No se podrá obligar a los prestadores de servicios al ejercicio de una única actividad de forma exclusiva, bien sea a través de la imposición de requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una actividad específica, bien sea mediante la imposición de requisitos que restrinjan el ejercicio conjunto o en asociación de distintas actividades. 2. No obstante, para garantizar su independencia e imparcialidad, así como prevenir conflictos de intereses, podrán verse sujetos por ley a los requisitos a que se refiere el apartado anterior: a) Las profesiones reguladas, en la medida en que sea necesario para garantizar el cumplimiento de requisitos deontológicos distintos e incompatibles debidos al carácter específico de cada



ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID

profesión, siempre que los mismos se justifiquen de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 5 de esta Ley. b) Los prestadores que realicen servicios de certificación, acreditación, control técnico, pruebas o ensayos.”

Y cabe entender que, en este caso, la garantía del cumplimiento de requisitos deontológicos distintos a que se refiere el punto a) del artículo 25.2 reproducido, y debidos al carácter específico de cada profesión (abogacía y procura), se cumple con la prohibición del ejercicio simultáneo de ambas profesiones en un mismo procedimiento.

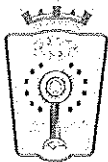
Se podría concluir así que los términos “*es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales*” no suponen la incompatibilidad absoluta de las profesiones de abogado y procurador, pues lo único incompatible es su ejercicio “*simultáneo*”, esto es, en un procedimiento en el que la norma exija la doble postulación no se puede actuar al mismo tiempo como abogado y como procurador, lo que no impide que un profesional actúe en un procedimiento como abogado y en otro procedimiento distinto como procurador, con la consiguiente consecuencia de que no es incompatible que un profesional esté incorporado como ejerciente a un Colegio de Abogados y a un Colegio de Procuradores.

Cuarto. A mayor abundamiento, la incompatibilidad que se analiza, en los términos expuestos, aparece en un precepto de la LEC, esto es, en una norma procesal y no sustantiva, dando a entender así que la referida incompatibilidad se establece en seno del concreto proceso judicial de que se trate.

Una interpretación contraria a la expuesta supondría dejar vacío de significado el adjetivo “*simultáneo*”, que acompaña al término “*ejercicio*”, y que figuran en el tan repetido artículo 23.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues hubiera bastado con la mera declaración de incompatibilidad – sin precisión adicional alguna – de ambas profesiones.

No existe, por tanto, motivo que justifique que el ICAM inicie acciones disciplinarias o deontológicas contra los citados colegiados, lo que no impide sin embargo que el Colegio de Procuradores de Guadalajara, o el Consejo General de Procuradores de España, si entienden que son incompatibles -de manera absoluta- las profesiones de la abogacía y procura, puedan sancionar al referido letrado desde la perspectiva de la procura, esto es, sancionarle por encontrarse como colegiados ejercientes en un Colegio de Procuradores.

Por ello, a tenor de lo dispuesto en los artículos 27.19 y 49.1 de los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y artículo 3 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid (Decreto 245/2000 de 16 de noviembre de la Consejería de Justicia, BOCM de 23 de noviembre), se acuerda el **ARCHIVO** sin más trámite de la referida queja.



ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID

Notifíquese esta resolución al letrado DON significándole que contra este acuerdo cabe Recurso de Alzada para ante el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid en el plazo de un mes desde la recepción de la presente comunicación; conforme a lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 19/97 de Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de Madrid, en concordancia con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/15 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Trasládese la presente resolución, a los solos efectos de su conocimiento y en cumplimiento de la previsión recogida en el artículo 14.4 del Decreto 245/2000 por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, al CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA quien, de acreditar la necesaria legitimación, podrá interponer el recurso reseñado en el párrafo anterior, en la forma y plazo que en el mismo se señalan.

Madrid, 30 de septiembre de 2020

Fdo.: Dionisio Escuredo Hogan
Responsable Deontología Profesional
(P.D. acuerdo Junta de Gobierno 30/01/2014)



ILUSTRE COLEGIO
DE ABOGADOS DE MADRID

Fecha: 01/10/2020

Ref: 5499/20

REGISTRO DE SALIDA

DON
PROCURADORES DE ESPAÑA.
LU

ABOGADO. CONSEJO GENERAL DE

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en relación a los datos de carácter personal que haya proporcionado al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y que el Colegio trate en relación a su solicitud, consulta o queja con la finalidad de atenderlas y gestionarla, le informamos que la legitimación del tratamiento deriva inicialmente de su solicitud y consentimiento y posteriormente de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y la Ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, así como de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dichos datos sólo serán cedidos, en su caso, a terceros para realizar las comunicaciones necesarias para la tramitación del procedimiento al que dé lugar la solicitud o queja. Le informamos que tiene los derechos a acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste, lo cuales puede ejercer por correo electrónico en derechosdatos@icam.es. En las páginas web: <http://web.icam.es/bucket/RGPD/deontologia.pdf> <http://web.icam.es/bucket/RGPD/actividadcolegial.pdf>

